

El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo

Bertha García Gallegos

Dra. en Sociología. Profesora de la PUCE.

Directora de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa

Email: bgarcia@puce.edu.ec

Fecha de recepción: julio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

En el Ecuador, las dictaduras de los años 60 y 70 vincularon a los militares con el desarrollo social y económico. Si bien en los 80 retornaron a los cuarteles, y a su bien acariciada política de autogestión empresarial, durante los 25 años de democracia formal se quedaron con esa visión idílica del poder basado en la fuerza y en el reemplazo de la política por la tecnocracia. Siguieron acariciando su vocación planificadora sobre lo social y lo político, hasta el punto que, ya en el siglo XXI, no dudaron en hacer suya la aventura gutierrista, apoyando tras bastidores a uno más de los populismos ecuatorianos. Criticando a la clase política, el gutierrismo saltó a la política por la vía electoral. Quiso revivir el proyecto militar. Pero ahora -como entonces- esta aventura no era más que una versión ideológica de una sociedad pensada en los cuarteles.

Palabras clave: militares y política, proyecto militar, proyecto social, seguridad nacional, militarismo, corporativismo

Abstract

In Ecuador, dictatorships of 60s and 70s tied the military to the social and economic development. Although in the 80s they returned to the quarters, during the 25 years of formal democracy they remained that idyllic vision of power based on force, and the replacement of politics by technocracy. They continued caressing its planning vocation on the social and the political, so far to, already in XXI century, they did not doubt in doing theirs the Gutierrez adventure, supporting one more of the Ecuadorian populisms. Criticizing the political class, *el gutierrismo* jumped to politics through the electoral route. It wanted to retake the military project. But now -like then- this adventure was not more than an ideological version of the society built into the quarters.

Keywords: Military and Politics, Military Project, Social Project, National Security, Militarism, Corporativism

Los proyectos societales de los militares

Desde el siglo XVIII, pero especialmente durante el XX, el tema de los proyectos sociales estuvo vinculado al desarrollo de las ideologías y de los sujetos sociales que las portaron, construyendo particulares visiones de la modernidad. Pero este no es ciertamente el caso de la historia política latinoamericana, donde actores institucionales como los militares jugaron papeles insospechados. Desde su independencia, Latinoamérica fue tierra de caudillos y militares. Los estados latinoamericanos carecían de cohesión interna y de articulaciones externas al momento de su irrupción como unidades políticas. La dispersión y atomización social fue subsanada con estructuras militares desproporcionadas que fungían de ases vertebradores de la sociedad y el estado. En su afán de organizarse a sí mismas y de hacer del caos un orden, aunque precario, establecieron alianzas y oposiciones contradictorias y de todo género. Se convirtieron en mediadoras de los conflictos políticos y en árbitros de los débiles procesos de democratización. Sus posiciones maximalistas frente a los abundantes problemas limítrofes que heredaron estas naciones desde los tiempos coloniales, hicieron difícil cualquier entendimiento en el plano de la diplomacia interestatal (García 1999) y fueron la base de un enorme poder que desplegaron sobre sus propios pueblos, estableciendo inviolables y sagrados “espacios del secreto” que sirvieron sobre todo para evitarles el engorroso deber de rendir cuentas.

Durante la Guerra Fría, jugaron un papel decisivo en la afirmación de la geopolítica norteamericana. Las políticas prácticas de los EE.UU dieron un espaldarazo a las corporaciones militares latinoamericanas, convirtiéndolas en ejes de proyectos políticos destinados a disciplinar a las sociedades en función del nuevo orden hemisférico anticomunista y cris-

tiano. En el Ecuador, las dictaduras de los años 60 y 70 vincularon a los militares con el desarrollo social y económico, hasta el punto que lograron delinear una visión integradora de la sociedad que querían. En ésta, todo -pero especialmente sus propios intereses corporativos- tenía cabida. Luego de la Guerra del Cenepa (1995) se acrecentó su voluntarismo y se mezclaron con populismos de todo género encontrando clientelas especialmente políticas. El “gutierrismo” quiso hacer realidad el gran anhelo del militarismo ecuatoriano: desplazar a una clase política nunca bien preparada, según su óptica, para dirigir los destinos nacionales.

Este artículo tiene el propósito de hacer una lectura de los acontecimientos del 20 de abril, evocando las líneas substanciales del proyecto de sociedad que construyeron los militares de este país, y demostrar entre líneas (porque así se presentan las historias nacionales) hasta dónde pudieron llegar.¹

Un proyecto de sociedad acariciado en los cuarteles

“La historia se repite con los mismos ropajes; unas veces como tragedia y otras como comedia”, escribió Marx en el *18 Brumario de Luis Bonaparte*. Sin duda triste opción para los pueblos que no aprenden de sus experiencias históricas. Con las distancias y diferencias respectivas, treinta y cinco años después, hablemos de un Ecuador cuyos escenario, actores y circunstancias parecen casi idénticos a los años setenta.² Nos preguntamos: ¿cuales son los sucesos del 20 de abril de 2005 que traen a la memoria el golpe militar de febrero de

1 Para un análisis de la formación y mantenimiento de los proyectos militares en el Ecuador, ver García (1987).

2 Las diferencias tienen por fuerza que admitirse. El Ecuador de comienzos de los años setenta era una economía oligárquica basada en la exportación agraria. El presupuesto del Estado en 1973 era de un millón de dólares. En 2005 alcanza los 6.810 millones según datos del Ministerio de Economía.



1972? ¿Habrá algunas líneas de continuidad entre esos dos procesos?

El gobierno militarista de Gutiérrez terminó gracias al golpe de mano de la mayoría legislativa en la tarde y noche del 20 de abril de 2005; mientras que en la madrugada del 13 de febrero de 1972 empezaba apenas a dibujarse el sueño militar de la transformación política del país por parte de las Fuerzas Armadas; el golpe de Estado estaba empapado de la ideología de la seguridad nacional que había cundido en los cuarteles de América Latina asumiendo múltiples formas y expresiones. Joseph Comblin describió un tipo ideal del fenómeno que iba desde el nacionalismo desarrollista, que fue el caso de Brasil de la primera etapa, del Perú de Velasco Alvarado, del Ecuador durante el gobierno de Rodríguez Lara, hasta el estado de la contrainsurgencia, la guerra sucia y el terrorismo oficial como fue el caso del Chile de Pinochet, de Uruguay Argentina de los años setenta.³

Para los partidarios de Pinochet, fue la disciplina militar aplicada sobre la sociedad, de la mano de los “Chicago boys” y sus políticas neoliberales, la que abrió paso a Chile hacia el crecimiento económico en los oscuros años setenta y ochenta. Pero olvidan la sangrienta represión a los ciudadanos, la horrenda filosofía contrainsurgente que causó muertos, desa-

3 Joseph Comblin, citado por Fitch (1998). Para Comblin, el tipo ideal de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, producto del entorno de la Guerra Fría, tenía este contenido: un marco conceptual que supedita estrategia, objetivos y política nacional a la seguridad del Estado; una hipótesis de conflicto que enfatiza en la seguridad interna (amenaza comunista); una teoría del uso de la fuerza militar en las amenazas internas, como si fueran externas (el comunismo internacional); una justificación racional al uso de medios que violan los Derechos Humanos, como la tortura y la desaparición; la vinculación entre Seguridad y Desarrollo, tomando al subdesarrollo y a la pobreza como fuente de producción de la insurgencia comunista; y la justificación de la intervención militar directa, cuando malos gobernantes civiles ponen en peligro la seguridad nacional.

parecidos y una enorme división social que aún en estos días, a comienzos del siglo XXI, no termina de saldarse.

En el Ecuador, quienes aún permanecen como admiradores del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se quedaron con la ilusoria imagen del rápido crecimiento económico de unos pocos años (realmente fueron dos: 1973-1974) basado en el boom petrolero (el precio del petróleo trepaba en un año desde un dólar por barril, a más de cuarenta, gracias a la crisis petrolera del medio oriente, que preocupaba al mundo internacional de entonces). Los militares no toman en cuenta que no fueron ellos ciertamente los causantes del referido boom de la economía, sino los petrodólares que empezaron a fluir y los tecnócratas civiles, que habían mentalizado el golpe y la política de desarrollo que lo justificaba, con el objeto de emprender en una redistribución social de los nuevos recursos del Estado. El Estado tenía ahora recursos y esto era lo nuevo. Los tecnócratas civiles confabulados con el cambio social prefirieron poner el destino en manos militares antes que en la voraz oligarquía presta a festinar la nueva riqueza, pues la mesa estaba puesta con la Ley de Hidrocarburos del interino Otto Arosemena (García 1987). Hay que reconocer que tecnócratas y militares actuaban con la ingenuidad y buena fe que inciertas circunstancias otorgan a bisoñas experiencias. Pero, luego del histórico 11% de crecimiento que alcanzó la economía ecuatoriana en 1973, los tecnócratas de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) se fueron despechados de las pugnas militares y las arremetidas de la Texaco Gulf. El gobierno militar descendió y fue de tumbo en tumbo, causando, de paso, enormes fisuras y estragos dentro de las filas militares, cuya unidad corporativa se esfumó. Entonces la “dictablanda” mostró lo que realmente era: “una abusiva usurpación del poder”. La tragedia del ingenio Aztra y la muerte de Abdón Calderón quedan a la espera de

que alguien reviva la memoria.

Desde enero de 1976, desaparecidos de la escena política tanto tecnócratas civiles como Rodríguez Lara por las maniobras de la cúpula militar, la distribución de petrodólares (ya sin boom y sin política alguna) llovió a manos llenas por todos los pueblitos de la sierra y de la costa. Un enjambre de calles, estadios, canchas de fútbol y escuelitas surgieron por doquier, bautizados con el nombre de algún triunfiro. En 1976 también se emprendió en la “modernización del equipo militar” que dio al autoritario Durán Arcentales un puesto entre los héroes castrenses. Años después, en noviembre de 2004, el Ministro de Economía Mauricio Yépez, en un Seminario sobre Presupuesto militar organizado por la PUCE, vinculaba ese hecho con la multiplicación geométrica de los intereses de la deuda externa que ahora nos agobia. Recuerdo que el flamante equipo militar fue exhibido al público en 1977, en gran parada para la cual se construyó en Quito el graderío de la Shirys. No faltaron quienes maliciaron que los militares marcharon sobre Quito con tremendas máquinas de guerra, con ánimo de disuadir a las crecientes masas antimilitaristas que empezaron a brotar por todos lados, rechazando a los funcionarios militares que se empeñaban en impedir la entrega del poder a los civiles. ¡Es que nueve años de ocupación militar de la sociedad nadie aguanta! Tampoco es verdad que los militares “siempre” han gozado de popularidad.

En 1981, el episodio de Paquisha, con el Perú, ya durante el primer gobierno civil, nos puso súbitamente pies en tierra. Tantos años de politiquear habían convertido a nuestros militares, con maquinaria bélica nueva y todo, poco menos que en inservibles para la defensa del país. La defensa es la única misión que, por último, la sociedad espera que los militares sepan hacer bien.

¿Qué pasó en Ciespal?

Volviendo al principio, esto es, a registrar lo ocurrido en nuestro país en la tarde del 20 de abril de 2005, nadie podía adivinar que en la CIESPAL⁴ se preparaba otra guerra, esta vez para defender el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó al poder por vía electoral, el 15 de enero de 2003, luego de una campaña en la que capitalizó el hacer derrocado al gobierno “neoliberal” de Jamil Mahuad el 30 de enero de 2000, en medio de una insurrección indígena-militar. Sus dos años de gobierno fueron todo menos “la refundación del país” que prometió.

Ya en el desenlace, ubicadas las fuerzas militares a doscientos metros del teatro de los acontecimientos, recordaron sin duda la vieja estrategia de cerco de otros siglos. Esperaban pacientemente que los propios acontecimientos de violencia que acompañaron el *sui generis* cambio de mando presidencial, les obligaran a “salvar a la Patria” nuevamente. Nada mejor que asumir el poder como Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, si cinco o más diputados resultaran convertidos en “lamentables bajas”, o quizá el propio presidente. Para eso andaban entre los infiltrados de la CIESPAL algunos “agitadores” y uno que otro “campana” con uniforme militar que azuzaban a los presentes a pedir la “histórica intervención patriótica de los generales”. El día anterior se habían juramentado los Altos Mandos con Gutiérrez para sostenerlo o reponerlo, según el caso, aconsejándole que “adelantara las elecciones”. Así, el inefable caudillo podría incluso volver a presentarse como candidato. Confiaron en la eficacia de las “operaciones psicosociales” que ablandan a cualquier “enemigo externo” en caso de guerra, pero que en caso de crisis política hasta pueden ser aplicadas sin remilgos a los pro-

prios ciudadanos. Así efectivamente se había procedido durante “todo el gobierno militar de Gutiérrez”. “Ablandamiento” era el que se quiso aplicar al Congreso el mismo día de la inauguración del período presidencial, el 15 de enero de 2003 con el anunciado incidente de no recibir la banda presidencial de manos de “los mismos de siempre”. “Ablandamiento” siguió mandando pleitos a la clase política por una u otra cosa, o asediando a los legisladores en los propios tribunales de justicia⁵ (caso Haro). Igual “ablandamiento” fue aplicado a la primera marcha de protesta en Quito hacia la plaza de San Francisco, cuando la euforia de los quiteños contestatarios fue opacada por el *team* de bailarinas tropicales y sus fans, entre los que constaba el mismo Presidente. Guerra psicológica cuyo teatro de operaciones fue la misma sociedad.

Milagrosamente las bajas no se produjeron en la CIESPAL en la tarde del 20 de abril, de modo que el comandante de la Primera División y sus 400 hombres, esperaron por nada durante cuatro horas bajo la lluvia, a dos cuerdas de distancia de los acontecimientos. Casi tres meses después, los ecuatorianos esperamos que se aclaren las posiciones de cada cual en el Plan de toma del poder. Pero también las razones para que el Jefe de la Primera División, agitadores militares uniformados y campana sigan tan frescos, en sus puestos, como si nada hubiese pasado.

4 Lugar en donde ocurrió la sesión del Congreso en la que se destituyó a Gutiérrez.

5 Desde el 2002, Guillermo Haro, diputado de la Izquierda Democrática, venía denunciando irregularidades cometidas en Fuerzas Armadas: contrataciones ilegales, sospecha de fuga de armas de los arsenales militares ecuatorianos hacia la guerrilla colombiana, etc. El tema empezó cuando estalló el Polvorín de la Brigada Galápagos situada en plena ciudad de Riobamba, al sur del Ecuador. Evidencias de errores técnicos en el manejo de explosivos se habrían encontrado y el Legislador se empeñó en señalar culpables. La respuesta de la cúpula militar fue una arremetida contra el diputado, solicitando al Congreso su desafuero y haciendo *lobby* en los juzgados y cortes para acorralarlo.

Las razones de la militarización del gobierno gutierrista

¿Por qué los militares, como personas y como institución, se involucraron con tanto fervor en el gobierno de Gutiérrez populista, ineficaz, que entró a saco con familiares, allegados y militares en servicio activo, a ocupar el Estado como si fuera un botín? La mayoría de los jefes militares implícita o explícitamente se adherieron al gobierno o no pudieron distanciarse de él, perdiendo totalmente la noción de los principios institucionales y las razones jurídicas que sustentan su presencia y permanencia institucional, como fuerzas del Estado para misiones completamente distintas a las de gobernar el país. Ocupando la administración de Aduanas, y ejerciendo funciones en Pacifictel, en Petroecuador y tantos otros destinos, se olvidaron del principio de no deliberación y de que la obediencia militar, que es el pilar de la disciplina institucional, no es a la persona del Presidente sino al Estado de Derecho.

Una respuesta posible es que consideraron que este, el de Gutiérrez, era un “gobierno militar” y había que arrimar el hombro para “no hacer quedar mal” al que había subido al poder empujado por un *sui géneris* partido surgido de las propias entrañas de las Fuerzas Armadas. “Los militares estamos preparados para gobernar el país mejor que los políticos corruptos de siempre” era una frase escuchada en los cuarteles muchos meses antes de los sucesos del 21 de enero de 2000. De modo que Gutiérrez encarnaba las aspiraciones políticas, el espíritu interno de los militares, en parte golpeados por los términos de los acuerdos de paz con el Perú, pero también por su propia incapacidad de salir de su encerramiento, romper con la endogamia crónica a la que llegaron por fuerza de apartarse de la sociedad civil, por creer que pueden manejar las crisis de re-posicionamiento en el mundo post-guerra fría y post-conflicto con el Perú por sus propios medios. El Mesías pudo ha-

ber sido cualquier otro; pero Lucio sin duda fue el más audaz.

Otra respuesta es aquella que sostiene la existencia de una continuidad ideológica en las fuerzas armadas, desde los años sesenta cuando empezó a infiltrarse elementos de la doctrina de Seguridad Nacional producida en el Brasil.⁶ La Ley de Seguridad Nacional se empezó a implantar desde 1963 en forma reservada, con el texto brasileño incluido, a pretexto de que entonces se necesitaba una Ley de defensa civil que reemplazara a las Juntas de Reconstrucción tan recurridas en años anteriores cuando una población era asolada por un evento de la naturaleza.⁷ La Ley proporcionaba a las dictaduras militares una suerte de Constitución, un paraguas contra cualquier desliz jurídico y un instrumento apropiado para entender a la sociedad desde la perspectiva militar, que pretendía suprimir el conflicto social por decreto y dar a las Fuerzas Armadas la condición de sujeto político superior. La verdad es que desde entonces se fue forjando un “proyecto militar” empeñado en rescatar los supuestos éxitos de las dictaduras (de la Junta de los sesenta y de las dos dictaduras de los setenta).

La doctrina de la seguridad nacional sigue viva en la mentalidad militar

Según Fitch (1998), en América Latina el lenguaje conceptual de la seguridad nacional es típicamente mezclado con una orgánica y

6 La Ley de Defensa Nacional de 1951, expedida por el gobierno de Velasco Ibarra, ya acusa algunos elementos identificados como parte de la doctrina. Ver Aguilar (2005).

7 Informantes calificados señalan que el texto de la Ley de Seguridad Nacional, fue elaborado a semejanza de otro usado en Brasil. Originalmente se intentaba contar con una Ley de Defensa Civil para organizar una estructura que reemplazara a las “Juntas de Reconstrucción Cívica” organizadas en casos de situaciones de desastre provocados por eventos de la naturaleza.



corporativa perspectiva militar de la sociedad y la política que, implícitamente, denigra a los políticos civiles a los que se considera incapaces de resolver los conflictos sociales y lograr el bien común. Los escritos militares definen a la seguridad nacional como sinónimo de armonización entre los campos militares, diplomáticos, económicos y psicosociales para alcanzar los objetivos nacionales. Estos aparecen como “permanentes y generales”, trascendiendo los gobiernos individuales. Los civiles son denigrados por mantener intereses partidistas, oscuros y falsos. “Esta perspectiva militar es profundamente antipolítica, privilegia una visión unitaria de nación o estado que no es compatible con la sociedad civil real”. Desde esta perspectiva, se entiende que la acción del gobierno debe ser un ejercicio eminentemente tecnocrático. No se entiende el juego de conflictividades alternativas, la importancia de los mecanismos institucionales de participación y la inevitabilidad de los conflictos ideológicos. La antipatía militar al pluralismo político es reflejado en la consecuente denigración del “político real”.

Las doctrinas de las seguridad nacional de los 60 y 70 dieron un fundamento intelectual común a los roles militares; un fundamento

que pretendía reemplazar a los burócratas civiles en el manejo de políticas sociales y, más específicamente, a los roles militares en la política “cuando los líderes civiles se demostraban incapaces para manejar el desarrollo y la seguridad interna”

El tutelaje militar en la democracia ecuatoriana

En Ecuador, nueve años de dictadura y veinticinco de democracia parecen haber servido sólo para marcar, como un trazo continuado, las líneas maestras de un proyecto militar que no ha dejado de refundarse y refrescarse en cada episodio político e incluso militar. La victoria del Cenepa en 1995, así como la firma de la paz con el Perú en 1998, trajeron otros factores que no dejaron de confluír en el fortalecimiento de la percepción militar, corporativa y tutelar sobre la sociedad. En realidad, desde ojos militares la sociedad parece no tener una existencia propia y quizá no cuenta por sí misma, sino en la medida en que es construida idealmente por la representación que de ella se hace desde los cuarteles. Esto lleva a excluir aquello que no encuentra sitio en la imagen ideal: la clase política, los críticos y los analistas civiles de asuntos militares.

La transición del poder en 1979 en Ecuador estuvo condicionada al mantenimiento de la estructura militar y su dominio en las “áreas estratégicas”. El tutelaje militar se mantuvo soterradamente presente sobre los gobiernos de la transición en los años ochenta. Diversos conatos de insurrección no faltaron en la compleja adaptación de los militares a los poderes civiles. Pero ni estos ni los partidos políticos visualizaron la necesidad urgente en ese entonces de construir una fuerte (doctrinaria, jurídica y política) conducción civil sobre el poder militar, ni de posicionar a la estructura militar en el lugar que le corresponde entre las instituciones del Estado de

Derecho. Al contrario, especialmente el poder legislativo le ha cedido posiciones constantemente. Ecuador es quizá el único país en donde aún se excluye al parlamento de sus funciones de legislador y fiscalizador con respecto a los asuntos militares.

A contracorriente con las tendencias democráticas que se extienden en el mundo, en el Ecuador el poder militar llegó al punto de actuar realmente como una fuerza política. Por ello no hubo extrañeza cuando desde el 2001 surgió una suerte de brazo político militar, Sociedad Patriótica, que en su nombre evoca las antiguas cofradía militares de sociedades inferiores, y en su ideario reproduce totalmente la versión politizada y tecnocrática de la seguridad nacional, aquella que llega a justificar la intervención militar directa en la política. El ideario estaba dictado por quienes realmente se preparaban para gobernar u ocupar posiciones de decisión en las empresas militares y, ¿por que no?, en el gobierno. Para ello, los sistemas de calificación de oficiales superiores se habían convertido en poco menos que un concurso de merecimientos (Castro 2005). Pero también registra el surgimiento de un nuevo nacionalismo nacido del descontento militar por los términos de la reciente solución limítrofe y posiblemente de la infiltración en la ideología militar de elementos de la cultura contestataria de la mundialización.⁸

El pasado y un futuro incierto

Hemos hablado de la persistencia de un proyecto militar de sociedad en el Ecuador. Un fantasma que desde 1979 quiere volver recurriendo a imágenes del pasado para imponerse nuevamente a fuerza de no entender para nada el presente, de aferrarse a un pasado que no fue

⁸ Fenómeno que debe ser tomado en cuenta en análisis específicos.



como se lo recuerda, ni tan heroico y eficaz como se piensa. Que en su versión moderna, siglo XXI, fue mucho mas lejos que una farsa.

Bibliografía

- Aguilar, Juan Pablo, 2005, "El Comando Conjunto en la organización militar y en la política ecuatoriana" en *La administración de la defensa en el Ecuador*, Quito, PUCE-KAS.
- Castro, José, 2005, "Autonomía y corporativismo militar en el Ecuador", Documento sin publicación, Quito, PUCE.
- Fitch, Samuel, 1998, *The Armed Forces and Democracy in Latin America*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- García Gallegos, Bertha, 1999, "New Perspectives on Using Diplomacy for the Resolution of the Ecuador-Peru Conflict", en Gabriel Marcella y Richard Downes, *Security Cooperation in the Western Hemisphere: Resolving the Ecuador-Peru Conflict*, North-South Center Press, Miami.
- , 1987, "Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador en los años setenta", Tesis doctoral, El Colegio de México, México.